



D. 3167/55/1a.
ALFONSO BAUTISTA.

México, Distrito Federal.- Acuerdo de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiséis de octubre de mil novecientos cincuenta y seis.

Vo. Bo.

V I S T O , para resolver, el juicio de amparo directo número 3167/55, promovido por Alfonso Bautista -- contra actos del Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, por violación a las garantías de los artículos 14 y 16 de la -- Constitución Federal; y

R E S U L T A N D O :

PRIMERO.- Los antecedentes del caso, según las constancias de autos son: el señor Alfonso Bautista Serrano, por apoderado, con fecha veintisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, ante el Juez Menor Municipal de San Lucas, Estado de Michoacán, promovió antejuicio en contra de María Isabel Saucedo de Estrada, para recuperar la posesión del predio rústico denominado "El Cuirindalito", ubicado en el mencionado Municipio de San Lucas; se fundó en una escritura privada de compraventa que Santiago, Amalia y María Natividad Saucedo Vences otorgaron a su apoderado. Tramitado el antejuicio y dictada la interlocutoria respectiva con fecha seis de abril del mismo -- año, se restituyó al señor Bautista Serrano la posesión reclamada. En nueve del mismo abril el apoderado de Alfonso Bautista promovió demanda de confirmación de derechos posesorios en contra de María Isabel Saucedo de Estrada, aduciendo que el actor es dueño en pleno dominio y posesión del inmueble denominado "Cuirindalito"; que Macario Saucedo, haciendo uso de violencia introdujo peones a la

propiedad del demandante, ejercitando así actos de dominio.

La señora María Isabel Saucedo Jaimes de Estrada contestó la demanda manifestando: que la propiedad y posesión plenaria del inmueble en cuestión la han tenido la demandada y su causante Macario Saucedo, desde hace más de treinta años, según lo justificaba con las diligencias de información ad perpetuam legalmente aprobadas, y debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad el seis de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro.

En la dilación probatoria del juicio se ofrecieron y desahogaron por la parte actora las siguientes pruebas: documental consistente en una escritura privada otorgada por Alfonso Avilés Pérez, notarialmente, en favor de los causantes del actor; testimonial de J. Dolores Mendoza López, J. Inés Avilés Pérez y Leodegario Santibañez; y confesional; por parte de la demandada: la documental consistente en las diligencias de información ad perpetuam promovidas respecto del predio rústico "Las Anonas", y el certificado expedido por el Recaudador de Rentas de San Lucas relativo a los inmuebles denominados "Las Anonitas", "Piedra de Amolar" y "El Cuirindalito".

La sentencia de primera instancia concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "Primero.- Ha procedido el presente juicio que sobre confirmación de derechos posesorios promovió el señor licenciado Arturo Ayala Juárez apoderado jurídico especial de Alfonso Serrano, contra María Isabel Saucedo Estrada.- Segundo.- El actor mediante su apoderado señalado, justificó en autos su acción intentada.- Tercero.- La demandada señora María Isabel Saucedo Estrada, no demostró sus excepciones ni defensas opuestas a la demanda.- En consecuencia, Cuarto.- Es de declararse y se declara que se confirma -



en todas sus partes la posesión provisional otorgada -
al señor Alfonso Bautista Serrano, el día 6 seis de abril
del año en curso, mediante la que se le entregó el pre-
dio denominado "El Cuirindalito" según resolución dicta-
da en el antejuicio correspondiente promovido en contra
de María Isabel Saucedo de Estrada.- Quinto.- Se conde-
na a la señora María Isabel Saucedo de Estrada al pago-
de las costas judiciales erogadas por el actor.- Sexto.-
Notifíquese....".

SEGUNDO.- Inconforme la demandada, apeló de -
la sentencia aludida, recurso que fué resuelto por el --
Magistrado de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de -
Justicia del Estado de Michoacán, por sentencia de once-
de abril de mil novecientos cincuenta y cinco, revocando
en todas sus partes la del inferior, con los efectos de-
que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la -
presentación de la demanda, y dejando a salvo los dere-
chos del actor para que las ejercitara en la vía y forma
convenientes.

TERCERO.- La referida sentencia de once de --
abril de mil novecientos cincuenta y cinco, constituye -
el acto reclamado en el amparo que se estudia. La demanda
fué admitida el veintisiete de junio de mil novecientos -
cincuenta y cinco y, corrido traslado al C. Agente del --
Ministerio Público Auxiliar, manifestó que se abstenía de
intervenir en este negocio, por carecer a su juicio de in-
terés público. La última actuación es de veintiocho de --
febrero de mil novecientos cincuenta y seis.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La existencia del acto reclamado --
aparece debidamente probada, con la copia certificada --

que de la misma obra en los autos de este amparo, que con otras constancias pidieron el quejoso y la tercera perjudicada

SEGUNDO.- Como primer concepto de violación se alega lo siguiente: "Violación de los Arts. 692 y 693 del Código de Procedimientos Civiles en cuanto que la ejecutoria del C. Magistrado de la Segunda Sala no está fundada en ley cuando declara en el Considerando V que es bastante a su juicio declarar procedentes los agravios 2o., 5o., 6o., 7o. y 8o. por el hecho de que el juez incurrió en el error al hablar en su sentencia de cuestiones que afectan propiedad o posesión plena sobre el predio discutido en el juicio fundándose en la escritura del actor y la certificación de la Secretaría del Juzgado y en la escritura otorgada por Alfonso Avilés a Santiago Saucedo y Hnos. respecto del mismo predio.- Esto es, que el Magistrado, además de no ser claro en su juicio, no establece una consecuencia lógica para llegar a la conclusión de procedencia de los agravios por ese hecho, pues si bien es cierto que en estos juicios posesorios no puede resolverse sobre cuestiones de propiedad o posesión plenaria, también es cierto -- que está obligado el juzgador a valorizar las pruebas documentales tales como escrituras y todas las demás con las que se pueda establecer una seguridad legal sobre posesión, y en el caso independientemente de las cuestiones de propiedad, dichas documentales son base para acreditar en grado de presunción legal que el titular de esos derechos de propiedad es poseedor".

En segundo término se alega la violación de los artículos 626 fracción II, 542 fracción VI y 648 del Código Procesal del Estado de Michoacán, diciéndose "que el sentenciador de segundo grado sub-estimó el texto de las



actuaciones judiciales consistentes en las actas levantadas con motivo de la prueba testimonial rendida por el actor y en las que en forma explícita y clarísima se dice que si fueron apercibidos los testigos sobre las penalidades en que incurren los que declaran falsamente", y se agrega, que las mismas disposiciones legales fueron violadas también porque la autoridad responsable en su ejecutoria no les concedió a las mencionadas actas un valor probatorio absoluto.

Como último concepto de violación se alega la de los artículos 664 y 665 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, porque, dice el quejoso: "a pesar de que los testigos en primera instancia llenan los requisitos exigidos por estos preceptos, la autoridad responsable hace una serie de consideraciones que destruye todo el valor de esta prueba tales como el decir -- que no consta que los testigos hayan sido protestados para decir verdad.... que no dan razón para darse cuenta -- precisamente en la fecha que se señaló de los hechos de despojo, circunstancia muy secundaria, máxime que al respecto no hay contradicción para que pudiera tener importancia la fecha... que ninguno da razón valedera de haber presenciado los mismos hechos de despojo; esto se desvirtúa con leer la razón fundada de su dicho que dieron los testigos... en fin, la valorización de esta prueba por parte del Magistrado, no está informada en los lineamientos señalados por los artículos aquí invocados y, por el contrario, dicha prueba sí satisface estas disposiciones".

TERCERO.- El primer concepto de violación es fundado. Es cierto, como asienta la responsable, que en los antejuicios no se discute cuestión alguna que afecte la propiedad o la posesión plena; pero no es exacto que -

esta razón de principio excluya la necesidad o utilidad de dilucidar quién es el propietario del inmueble en litigio. De acuerdo con esta conclusión, el actor estuvo en aptitud de acreditar su calidad de propietario y poseedor legítimo del predio "Quirindalito" pues, como dice bien la responsable, existe en favor de quien acredita ser propietario de un inmueble, la presunción de que es el poseedor del mismo; y esto es un elemento previo de la desposesión que se reclama. En el caso, el actor exhibió sus títulos para demostrar el origen de la posesión y sus derechos a la misma, y no es posible que una persona que despoja a otra de la posesión de un inmueble, esté colocada en una situación mejor respecto del dueño, que exhibe sus títulos, y en consecuencia, la tesis de esta Suprema Corte, que, efectivamente, sostiene que en los interdictos no se estudien las cuestiones de propiedad, no debe conducir hasta el grado de entenderla con la amplitud de que porque el propietario exhibe sus títulos de propiedad, para justificar el origen de su posesión y la prueba de sus derechos posesorios, esa tesis lleve a considerar que los tribunales no deben ocuparse de su estudio y deben desestimarlos porque se trata de cuestiones ajenas al interdicto, que tal significa propiamente la promoción del antejuicio, cuando el dueño tiene a su favor la presunción de poseedor. No es posible tal rigorismo porque, si existe una presunción jurídica de posesión en favor del propietario, esa presunción de posesión es apta en favor de la demanda de confirmación de derechos posesorios/^{decretados} en el antejuicio, no para el efecto de declarar la propiedad sino para probar la posesión y la naturaleza de esa posesión.

El segundo y tercer conceptos de violación también son fundados en tanto que, como se verá, la autoridad responsable no apreció debidamente las pruebas aportadas al juicio.



Ya se dijo que los títulos exhibidos por la parte actora surten el efecto de hacer presumir en el ánimo del juzgador la posesión del actor respecto del bien en litigio. Ahora bien, esa presunción, en la especie, se ve fortalecida plenamente con el resultado que arroja la prueba de testigos. Se advierte, en efecto, que las declaraciones recibidas en autos, tanto en el antejuicio como en el juicio de confirmación de derechos posesorios, las recibió la autoridad judicial con sujeción a un interrogatorio escrito que contestaron a la misma autoridad judicial, por lo que se llenaron los requisitos que establece el artículo 482 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; sin que una posible irregularidad en su recepción pueda presumirse, toda vez que en este expediente de amparo no se verifica esa circunstancia, ni en los conceptos de violación se reclama, sobre ese particular, de donde se concluye que la prueba testimonial fué formalmente legal. En cuanto a las declaraciones que se rindieron en el antejuicio, Leodegario Santibáñez de la Torre manifestó que conoce el predio por haber pasado varias veces por él; que este predio lo poseía Alfonso Bautista porque el declarante se dió cuenta cuando él lo compró; y aclara que desde hacía muchos años Santiago Saucedo y sus hermanos, es decir, los causantes de Alfonso Bautista, poseían ese terreno. Ezequiel Moreno ^{Mendoza} declaró en iguales términos y dijo que lo dicho le constaba por ser vecino y conocer el terreno y asimismo a Bautista. Elédio Serrano de la Torre contestó en forma parecida. En la prueba testimonial recibida en el juicio, J. Dolores Mendoza dijo conocer el predio porque tiene varios años

de transitar por ese lugar; sabe que el terreno pertenece al actor porque éste lo compró a Santiago Saucedo. J. Inés Avilés Pérez declaró conocer el inmueble porque perteneció a su hermana Alfonso Avilés Pérez, quien a la vez vendió al causante^{de} Alfonso Bautista, Santiago Saucedo. De lo anterior se sigue que los testigos afirmaron uniformemente el hecho de la posesión, y esta conclusión, aunada a la prueba que se deriva de los títulos exhibidos en el procedimiento, debe llevar a establecer la procedencia de la acción entablada, de donde no habiéndolo decidido así la autoridad responsable, amerita la concesión del amparo, y así se resuelve.

Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y V constitucionales, 45, 46, 79, 158 bis, fracción II, 185, 186 y 190 de la Ley de Amparo y 26, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Alfonso Bautista contra los actos que reclama del C. Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, consistentes en la sentencia de once de abril de mil novecientos cincuenta y cinco pronunciada en el toca a la apelación número 54/954 formada con motivo de la sentencia de primer grado dictada en el juicio sobre confirmación de derechos posesorios promovida por el quejoso en contra de María Isabel Saucedo ante el Juez de Primera Instancia de Huetamo, Michoacán.

Notifíquese; remítase testimonio de la presente resolución a la autoridad señalada como responsable, y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte



de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los Ministros José Castro Estrada, Mariano Ramírez Vázquez, Hilario Medina y Gabriel García Rojas, contra el voto emitido por el ponente Ministro Gilberto Valenzuela, que negó el amparo; en el concepto de que el Ministro García Rojas fundó su voto en los siguientes términos: Concedo el amparo porque en primer lugar, estuvo mal apreciada la prueba testimonial, por la autoridad responsable, y en segundo lugar, porque estimo que las pruebas relativas a la propiedad, que hizo valer el actor en el juicio, y que el Juez de Primera Instancia tomó en consideración, no se oponen a la confirmación de la resolución dictada en el antejuicio, porque siendo la tramitación de los juicios en el Estado de Michoacán bajo una sola forma, o sea, de juicio único, creo que está dentro del principio constitucional del artículo 17, de la economía procesal, que una vez obtenido el éxito en el interdicto de despojo, que se tramita en forma de juicio, la confirmación puede hacerse entrando al estudio mismo de la propiedad, como lo ha resuelto en otras ocasiones esta Suprema Corte de Justicia tratándose de asuntos de Michoacán en que se tramita el interdicto en forma de antejuicio, porque resultaría contra la economía, que se entable un juicio con todas las formalidades para obtener la confirmación del antejuicio, y después otro juicio con las mismas formalidades para obtener la declaración de propiedad. Se encomendó al Ministro Castro Estrada el engrose del fallo.

Firman los CC. Presidente y Ministros que -

intervinieron, con el Secretario de Acuerdos de
la Sala que da fe.- E.L.- "decretados" "Mendoza" "de".-
VALE.

EL PRESIDENTE:


LIC. GILBERTO VALENZUELA.

LOS MINISTROS:


LIC. JOSE CASTRO ESTRADA.


LIC. MARIANO RAMIREZ VAZQUEZ.


LIC. HILARIO MEDINA.


LIC. GABRIEL GARCIA ROJAS.

EL SECRETARIO:


LIC. ABELARDO CARDENAS MAC-GREGOR.

En 11 MAY 1959 por lista de la misma fecha, se
notificó la resolución anterior a los interesados
y al Ministerio Público Federal.

